



Editorial

"Calle y Parlamento"

El 23 de noviembre de 2003, ante desbordamiento de protestas callejeras contra votaciones en el congreso por IVA a alimentos y medicinas y privatización de la electricidad, el entonces diputado perredista y prestigiado politólogo Manuel Camacho Solís publicó en El Universal un artículo para advertir el riesgo de la ruptura entre la calle y el parlamento. Por su importancia en el contexto actual -las marchas y plantones de la CNTE y de la autodenominadas Generación Z-, reproducimos la parte final del texto de Camacho Solís:

Los responsables del gobierno, los legisladores y los líderes sociales de protesta pueden coexistir y salir bien librados, si cada uno hace su parte. Pero si en vez de un criterio político domina la lógica del control policiaco y del escalamiento de la protesta sin proyecto político, no solo habrá reformas sino que se reducirán los márgenes de gobernabilidad y de la estabilidad de la economía.

Habría que preguntarse si era indispensable llegar a este punto de posible acen- tuamiento de los conflictos sociales y políticos o si la obcecación del gobierno con "re- formas" que no están suficientemente pensadas y menos consensuadas, lo que está llevando a acen- tuar las resistencias dentro del Congreso de la Unión, a formar un fren- te político social de defensa del patrimonio nacional y a introducir un elemento adi- cional de presión al aun insuficientemente sólido arreglo de las instituciones políticas.

No era necesario. Menos aún con todo el margen y prestigio democrático con el que lle- go Vicente Fox a la Presidencia. Pero los errores en el manejo de los tiempos, en la selección de las prioridades y en la operación política que al principio no se aprecia- ban, ahora resultan cada vez evidentes para quienes observan el acontecer político.

No tenía por qué ser así. Pero a estas alturas las lamentaciones tampoco tienen ninguna utilidad. En las nuevas condiciones, se necesita un replanteamiento de lo que tiene que hacerse. Persistir en la idea de las "reformas", es tanto como cerrar los ojos la realidad, hasta que los hechos sean a tal punto dramáticos que obliguen al gobierno despertar, o que coloquen a todos en un terreno peligroso.

Ya no es momento de especular. La calle, el Congreso y el Ejecutivo tienen que asumir su responsabilidad política.

La calle debe mostrar que tiene fuerza, pero que a la vez tiene capacidad de autocontención. Quienes encabezaran la marcha tienen una amplia experiencia para saber ejercer sus derechos constitucionales y para hacer sentir su fuerza. Los medios de comunicación jugaran un papel central que, también, puede contribuir a la estabilidad o a la polarización. El objetivo de la calle es frenar la reforma cons- titucional del 27 y 28 y mayores impuestos al consumo. Lo puede. El único riesgo es la provocación que pudieran organizar o capitalizar los adversarios de la calle.

El congreso debe ser sensible ante la calle. Sin que eso signifique que tenga que aceptar los dictados de la calle. Su responsabilidad es acomodar al conjunto de intereses y visiones que existen en el país. Un punto central par ello es ofrecer una respuesta fiscal que contribuya a la estabilidad y el crecimiento, sin exacerbar el conflicto social. Otro es que el Presidente decida su posición final sobre la electri- cidad: seguir intentando, o reconocer -así sea tardíamente- los límites objetivos de su proyecto.

El Ejecutivo no se puede escudar detrás del gobierno del Distrito Federal para que le haga la tarea el mantenimiento del orden público, y del Congreso -especial- mente de la representación del Partido Revolucionario Institucional- para que le sa- que las castañas del fuego. Si se ha llegado a esta situación, es en buena medida por los errores de estrategia y táctica del Ejecutivo. Debe de asumirlo y corregirlo ¡ya!

Antes de que la obcecación y la irresponsabilidad pongan en jaque la estabi- lidad, convendría pactar en serio la estabilidad de los próximos tres años. A todos conviene hacerlo. Pero el pacto implica, necesariamente, que el gobierno desista de objetivos y métodos que no han funcionado. Es preferible un avance lento en la dirección correcta -una consolidación democrática y recuperación de la economía- que un discurso gubernamental agotado y políticamente inviable.